



## **Asamblea General**

Distr.  
GENERAL

A/48/532  
25 de octubre de 1993  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

---

Cuadragésimo octavo período de sesiones  
Tema 31 del programa

### **SITUACION DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI**

#### Nota del Secretario General

En el documento adjunto figura un informe provisional de la Misión Civil Internacional establecida en Haití por las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en relación con la situación de la democracia y los derechos humanos en Haití. El Sr. Dante Caputo, Enviado Especial designado por mí y por el Secretario General de la OEA, también ha presentado este informe al Secretario General de la OEA, quien lo pondrá a disposición de los Estados miembros de esa organización. El informe se distribuye para información de los miembros de la Asamblea General, de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 47/20 B de la Asamblea, de 20 de abril de 1993.

ANEXO

Informe de la Misión Civil Internacional en Haití

I. INTRODUCCION

1. Este informe se presenta de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 47/20 B de la Asamblea General, de 20 de abril de 1993, relativa a la situación de la democracia y de los derechos humanos en Haití, en la que se pide al Secretario General que informe periódicamente a la Asamblea sobre la labor de la Misión Civil Internacional en Haití.

2. El informe provisional de la Misión abarcó el período comprendido entre el 9 de febrero y el 31 de mayo de 1993 y fue distribuido a los miembros de la Asamblea General el 3 de junio (A/47/960 y Corr.1). El presente informe contiene un análisis cabal de la labor de la Misión y de la situación de los derechos humanos en Haití durante el período comprendido entre el 1º de junio y el 31 de agosto de 1993 y se refiere además a importantes acontecimientos ocurridos en septiembre.

II. DESPLIEGUE DE LA MISION

3. La Misión comenzó abriendo oficinas en las principales ciudades de cada uno de los nueve departamentos (départements) de Haití. Todas esas oficinas vienen funcionando desde marzo. A mediados de septiembre se abrieron nuevas oficinas en cuatro departamentos, con lo que el número de oficinas de la Misión se elevó a 13:

<u>Departamento</u>	<u>Oficina(s)</u>
Oeste . . . . .	Puerto Príncipe, centro
. . . . .	Puerto Príncipe, Carrefour
Artibonite . . . . .	Gonaïves
. . . . .	Saint-Marc
Centro . . . . .	Hinche
. . . . .	Mirebalais
Sudeste . . . . .	Jacmel
Grand'Anse . . . . .	Jérémie
Sur . . . . .	Les Cayes
Nordeste . . . . .	Fort-Liberté
Norte . . . . .	Cap-Haïtien
Noroeste . . . . .	Port-de-Paix
. . . . .	Môle Saint-Nicolas

4. La Sede de la Misión en Puerto Príncipe está organizada de la siguiente manera:

Oficina del Director Ejecutivo (incluye los servicios de seguridad)

Departamento de Medios de Información

Departamento de Operaciones (incluye los servicios médicos y de comunicaciones)

Departamento de Administración

División de Derechos Humanos

Oficina del Director de Derechos Humanos (incluye los servicios de capacitación y de enlace con las organizaciones no gubernamentales)

Departamento de Investigación

Departamento de Asuntos Jurídicos

Departamento de Educación en materia de Derechos Humanos

5. Al 15 de septiembre, la Misión contaba con 204 observadores del respeto de los derechos humanos y otros profesionales sustantivos (97 de la OEA y 107 de las Naciones Unidas) y con 28 funcionarios administrativos internacionales (3 de la OEA y 25 de las Naciones Unidas), distribuidos de la siguiente manera:

Director Ejecutivo, Director de Derechos Humanos	2
Administración	24
Operaciones/Seguridad	15
Departamentos de Derechos Humanos y de Medios de Información	28
Observadores desplegados en los equipos regionales	137
Observadores en formación	21
Adscritos a la Oficina del Enviado Especial	5

6. Aunque, según lo previsto quedan todavía por desplegar 280 observadores del respeto de los derechos humanos, la Misión ha contratado, por conducto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, al mayor número de tales observadores que se haya desplegado en cualquier operación sobre el terreno hasta la fecha. Ha sido necesario encontrar observadores que se expresaran con soltura en francés y/o créole, el mayor número posible de observadores que tuvieran experiencia sobre el terreno y que en todos los casos estuvieran dispuestos a vivir en condiciones difíciles, así como el mayor número posible de observadores que tuvieran experiencia en materia de derechos humanos y/o capacitación jurídica. La Misión está integrada por personas de más de 45 nacionalidades. A su llegada, los observadores reciben un curso preparatorio de tres semanas, que incluye clases de idioma créole y aborda los temas siguientes: introducción a la historia y a la cultura de Haití, los principios internacionales en materia de derechos humanos y el sistema jurídico de Haití, el mandato y la política de la Misión, y técnicas de observación e investigación en la esfera de los derechos humanos.

7. Desde comienzos de mayo, el carácter singular de la Misión como operación conjunta sobre el terreno de una organización regional y de las Naciones Unidas ha quedado reflejado en una estructura plenamente integrada. El Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto/Director de Derechos Humanos tienen un doble mandato, al haber sido designados por la OEA y por las Naciones Unidas;

/...

los observadores de cada equipo regional y el personal de cada departamento de la sede incluyen personas enviadas por ambas organizaciones, al igual que los coordinadores regionales y los jefes de departamento. Cada organización tiene sus propias políticas y procedimientos administrativos, financieros y de personal, cuya armonización no es tarea fácil; no obstante, el hecho de que la Misión haya logrado funcionar sustantivamente como operación integrada constituye un precedente importante y alentador.

8. En gran parte del período que se considera, la Misión ha funcionado en condiciones excepcionalmente difíciles. El alcance de su labor depende en lo esencial de la movilidad de sus observadores, que se ha visto limitada por la escasez de vehículos disponibles para la Misión y, desde finales de junio hasta comienzos de septiembre, por la escasez de gasolina causada por el embargo de petróleo impuesto con arreglo a la resolución 841 (1993) del Consejo de Seguridad. Durante el embargo, como parte de una campaña de hostilidad ante la presencia de la Misión llevada a cabo en particular por televisión y por radio, se hicieron llamamientos públicos para que no se suministrara combustible a los vehículos de la Misión. A pesar de que los observadores y los conductores de los vehículos hicieron grandes esfuerzos por seguir llevando adelante todas las tareas de la Misión que les fuera posible cumplir, la imposibilidad de obtener combustible durante períodos de muchos días en algunas localidades limitó las visitas de los observadores a algunas zonas y coartó otras actividades. Las comunicaciones telefónicas en Haití son deficientes y el acceso de la Misión a ese servicio viene siendo sumamente limitado; en éste y en otros aspectos, la Misión no ha contado con la plena asistencia de las autoridades de Haití, las cuales, con arreglo al mandato conferido, tienen que "dar, en la medida de lo posible, las facilidades necesarias para que la Misión pueda cumplir sus funciones". Los observadores de la Misión han sido objeto de malos tratos, hostilidad y amenazas por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Haití y muchos de sus auxiliares civiles armados. La Misión ha tenido graves preocupaciones por la seguridad de su personal internacional y local, preocupaciones que se han intensificado en períodos de especial tensión en los que a veces ha sido necesario restringir sus movimientos, en particular aquellos que respondían a necesidades de esparcimiento. Los observadores de la Misión y su personal local, especialmente sus conductores, han mantenido una presencia activa incluso en las circunstancias más difíciles, demostrando un valor y un empeño ejemplares.

### III. ENFOQUE ADOPTADO POR LA MISIÓN

9. El Presidente Jean-Bertrand Aristide solicitó el envío de la Misión en su carta de fecha 8 de enero de 1993 dirigida al Secretario General (A/47/908, anexo I). En ella estableció la meta de "convencer a todas las partes interesadas de que la crisis política actual solamente podrá resolverse mediante la eliminación de todas las formas de violencia y de violación de los derechos humanos". Solicitó una presencia multinacional en Haití para supervisar el respeto por todos los sectores de la sociedad haitiana de los siguientes principios:

- a) El respeto de la vida y de la integridad de todos los haitianos;

/...

b) El respeto de la Constitución haitiana, de las leyes, de los procedimientos establecidos y de los principios consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención interamericana sobre derechos humanos, de la que es parte Haití;

c) El respeto de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos haitianos y de las instituciones de la República.

Conforme a su mandato, las tareas fundamentales de la Misión quedaron definidas de la siguiente manera:

a) Reunir información sobre la situación de los derechos humanos en Haití y hacer las recomendaciones apropiadas para promover y proteger esos derechos;

b) Prestar especial atención al respeto del derecho a la vida, a la integridad y la seguridad individuales, a la libertad de expresión y la libertad de asociación.

10. En una situación en la que se han generalizado las violaciones del derecho a la vida, de la integridad y la seguridad individuales, de la libertad de expresión y de la libertad de asociación, las actividades de reunión de información de la Misión se han centrado en ese tipo de violaciones. Si bien el número de personas que se han presentado en las oficinas de la Misión para ofrecer información de esa índole ha ido en aumento a medida que se fue comprendiendo mejor su labor, la Misión ha adoptado un enfoque activo respecto de la reunión de información. Ha procurado establecer contactos con organizaciones locales y ha enviado a sus equipos de observadores a distintas localidades con la mayor frecuencia posible, habida cuenta de las limitaciones de personal, medios de transporte y (durante el embargo de petróleo) combustible. Ha hecho visitas periódicas a cárceles y otros centros de detención, o lo ha intentado. Ha divulgado su presencia y su mandato por radio y televisión y en entrevistas concedidas por sus dirigentes, y ha difundido ampliamente el texto de su mandato en créole y en francés. También ha solicitado y ha celebrado numerosas reuniones con asociaciones locales, iglesias y funcionarios para explicar su labor.

11. La Misión también adoptó un enfoque activo de su mandato de expresar a las autoridades de Haití su preocupación por las violaciones de los derechos humanos, de formular recomendaciones y de inquirir a las autoridades competentes respecto de su aplicación. En un contexto en que es urgente poner fin a las violaciones individuales de los derechos humanos y en que se suele hacer caso omiso de las comunicaciones escritas, los observadores de la Misión han expresado personal e inmediatamente su preocupación a las autoridades responsables. En general, han hecho observaciones a los comandantes locales de las Fuerzas Armadas, habida cuenta de que quienes cometen las violaciones de los derechos humanos suelen ser miembros de las Fuerzas Armadas, sus adjuntos (auxiliares civiles o attachés) o jefes de policía rurales (chefs de section) y sus ayudantes, cuya autoridad también dimana de las Fuerzas Armadas. Tales intervenciones de la Misión, en particular respecto de las detenciones arbitrarias, han surtido efecto con frecuencia, aunque han sido motivo de resentimiento por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando ha sido necesario, la Misión también ha informado a las autoridades judiciales de los casos

preocupantes. La sede de la Misión ha planteado determinados casos al Alto Mando de las Fuerzas Armadas, en persona y mediante comunicaciones escritas.

12. Dentro de lo posible y a fin de ejercer una influencia disuasiva, la Misión ha estado presente donde se temía que fueran a cometerse violaciones de los derechos humanos: en manifestaciones, reuniones y otros intentos de ejercer los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Obviamente, los observadores tienen instrucciones de no intervenir físicamente para impedir presuntas violaciones de los derechos humanos, ya que ello excedería del mandato y de las posibilidades de una misión civil, si bien el crédito de la Misión se vio afectado cuando se cometieron en su presencia golpizas, detenciones arbitrarias y, en una ocasión, un homicidio. La Misión ha recibido muchas solicitudes de protección de personas cuya seguridad individual estaba amenazada, pero en la mayoría de los casos no ha podido hacer más que mantenerse en contacto periódico con esas personas, si bien en ocasiones ha escoltado a quienes corrían peligro en situaciones particularmente arriesgadas. La Misión ha tomado medidas para que muchas víctimas de violaciones de los derechos humanos tengan derecho a asistencia letrada y/o tratamiento médico.

13. Como se recomendó en el Informe presentado al Secretario General por el equipo de expertos en derechos humanos sobre la Misión Civil Internacional encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en Haití (A/47/908, anexo III), la Misión hizo pública sin demora su reacción a acontecimientos y casos de violaciones concretos. Ello ha servido para dar a conocer su función y obtener la confianza del público, así como para lograr que las autoridades cobren conciencia de la preocupación de la comunidad internacional por la continuación de las violaciones. Entre el 1º de junio y el 15 de septiembre, la Misión hizo públicos 15 comunicados de prensa sobre aspectos de la situación en materia de derechos humanos.

14. Los objetivos de la Misión exigen que se establezca una estrecha relación de trabajo con las organizaciones haitianas que operan en la esfera de los derechos humanos. Desde su inicio, la Misión ha establecido cauces para comunicarse y consultar regularmente con organizaciones haitianas de derechos humanos. En los últimos años, en particular desde el golpe de Estado de septiembre de 1991 en el que se derrocó al Gobierno elegido democráticamente, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han desempeñado una función crucial en la promoción y la protección de los derechos humanos en los sectores más vulnerables de la sociedad, en circunstancias difíciles y peligrosas. Varios activistas de derechos humanos han tenido que buscar asilo en el exterior u ocultarse en el interior del país, y algunos han sido asesinados. Las organizaciones haitianas de derechos humanos han seguido funcionando en circunstancias difíciles y peligrosas en el período que se examina en el presente informe. Por su experiencia, han constituido una valiosa fuente de información y asesoramiento para la Misión. La Misión espera que su presencia haya servido para contribuir a la labor indispensable que esas organizaciones están realizando y deben seguir realizando una vez concluida la presencia de la Misión en Haití.

15. En el mandato de la Misión figura la tarea de "instituir un programa de información y de educación con miras a promover el respeto de los derechos humanos y a explicar el mandato que se le ha conferido". Los primeros espacios de radio y televisión utilizados se centraron en la Misión y en su mandato.

/...

El 20 de septiembre, la Misión inició una campaña de educación cívica con la consigna "Dwa ak devwa pou tout Ayisyen ak yon leta responsab" (Derechos y obligaciones de todo haitiano en un Estado de derecho). Los temas principales de esa campaña son la justicia, las libertades fundamentales y la democracia. La campaña utiliza espacios en la prensa escrita, la radio y la televisión, así como carteles y material de enseñanza, y es promovida activamente por conducto de todas las oficinas de la Misión. La campaña, de ocho semanas de duración, constituye la primera etapa de un programa a plazo más largo de educación en materia de derechos humanos, elaborado en estrecha cooperación con organizaciones haitianas, con miras a contribuir a las actividades educacionales de todos los grupos interesados en la promoción de los derechos humanos.

16. La Misión ha tenido como meta constante el convencer a todas las partes interesadas de que la crisis política no podrá resolverse más que eliminando todas las formas de violencia. A lo largo de toda la presencia de la Misión, se ha temido que, si no se avanzaba hacia una solución política pacífica, estallase una violencia más generalizada. A pesar de estos temores y de períodos de gran tensión, los actos de violencia ocurridos en Haití durante la presencia de la Misión han sido unilaterales y han sido cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por quienes operan bajo su dirección o con su complicidad contra civiles desarmados. La violencia practicada contra agentes del Estado por la población civil ha sido casi inexistente. Así, las violaciones efectivas de derechos humanos de las que se ha ocupado la Misión han respondido a la definición clásica de violaciones de derechos humanos comprendidas en el derecho internacional, que son de la responsabilidad del Estado. Ello no implica, desde luego, que se puedan olvidar los temores de que estalle una violencia más generalizada. El hecho de que se hayan seguido cometiendo graves violaciones de derechos humanos que, en gran medida, han permanecido impunes, sin que exista la perspectiva de que se lleve ante la justicia a los responsables de ellas, ha hecho que aumente el riesgo de que continúe esa violencia. La Misión ha hecho un llamamiento público para que se eviten todos los actos de violencia y de venganza personal, y espera que su campaña de educación en materia de derechos humanos ponga de relieve la importancia de establecer los principios y las instituciones de un Estado de derecho.

#### IV. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

17. A lo largo del período de despliegue de la Misión, la situación de los derechos humanos ha estado estrechamente vinculada a la evolución de la situación política. Durante el período a que se refiere el presente informe se han producido una serie de acontecimientos políticos importantes que han tenido repercusiones en el clima político, que ha fluctuado entre los progresos importantes y los momentos de aparente estancamiento en la transición al orden constitucional. La renuncia del Primer Ministro de facto, Sr. Marc Bazin, y la imposición por el Consejo de Seguridad de un embargo del petróleo y otras sanciones en junio, la firma del Acuerdo de la isla Governors y del Pacto de Nueva York en julio, la elección de nuevos presidentes y mesas de las dos cámaras del Parlamento y el nombramiento y confirmación del Primer Ministro Robert Malval y su Gobierno en agosto han conformado un contexto de expectativas, tensiones y temores acentuados. Ha habido una estrecha correlación entre los momentos cruciales en la situación política y el aumento de la tensión y la violencia en el país.

/...

18. Pese a los compromisos contraídos en el Acuerdo de la isla Governors y en el Pacto de Nueva York en relación con el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la situación de los derechos humanos en la capital, Puerto Príncipe, ha empeorado seriamente, mientras que en otras partes del país han continuado las violaciones de los derechos humanos del carácter descrito en el informe provisional de la Misión (A/47/960 y Corr.1) correspondiente al período comprendido entre el 9 de febrero y el 31 de mayo. El reconocimiento del Presidente Aristide y la aceptación de su regreso a Haití por el Parlamento y por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití no se han visto reflejados en un mayor respeto de la libertad de expresión de sus partidarios por parte de las Fuerzas Armadas y sus auxiliares civiles. Por el contrario, la perspectiva de la transición, aunque recibida con agrado por la gran mayoría de los haitianos con los que la Misión tiene un contacto cotidiano, ha suscitado aprensión y oposición en algunos sectores, entre ellos el de las Fuerzas Armadas y los que están vinculados a ellas. Cuando los partidarios del regreso del Presidente han tratado de expresar públicamente su adhesión, han sido objeto de una represión igual o peor. En Puerto Príncipe se ha producido un gran aumento del número de asesinatos, muertes en circunstancias sospechosas y desapariciones que han quedado impunes. Aunque estos crímenes tienen una motivación política, no todas las víctimas son activistas políticos. Entre ellos ha habido ciudadanos corrientes, y el propósito de esos crímenes es, al parecer, crear una atmósfera de miedo e intimidación, especialmente en las zonas pobres de la ciudad más claramente identificadas con el apoyo al Presidente. Las detenciones arbitrarias, las palizas y otras torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y las amenazas a la seguridad personal han continuado en todo el país, siendo el blanco principal de esas violaciones de los derechos humanos los partidarios del Presidente Aristide, denominados a menudo "lavalassiens", término derivado del movimiento Lavalas fundado por el Presidente Aristide antes de las elecciones de 1990.

19. Si bien muchas de esas violaciones se atribuyeron directamente a miembros de las Fuerzas Armadas, otras muchas fueron imputadas a los que están vinculados con ellas. Los auxiliares civiles de las Fuerzas Armadas colaboran con éstas en sus funciones de policía en Puerto Príncipe y en las provincias. A algunos de ellos se les entrega un documento de identificación y pueden llevar cualquier tipo de armas, desde bastones hasta armas pesadas. En las zonas rurales, la responsabilidad del orden público está delegada en un jefe de policía rural (chef de section) nombrado por las Fuerzas Armadas. Según la ley, los jefes de policía rurales pueden contar con la asistencia de dos ayudantes (adjoints), aunque en la práctica a menudo cuentan con gran número de ayudantes que han comprado el puesto y se dedican a la extorsión.

#### A. Violaciones del derecho a la vida

20. En su informe provisional, la Misión expresó su preocupación por el aumento del número de asesinatos y otros actos de violencia perpetrados impunemente, especialmente en Puerto Príncipe, durante el mes de mayo, en comparación con los dos meses anteriores. En ese mes se denunciaron ante la Misión nueve asesinatos o muertes en circunstancias sospechosas que se investigaron como posibles violaciones del derecho a la vida. En junio se recibieron cinco denuncias de esa índole. La cifra ascendió abruptamente en julio a 34, 28 de las cuales tuvieron lugar en Puerto Príncipe, y se mantuvo en el mismo nivel en agosto, mes

/...



en el que se registraron 33 denuncias, 30 de ellas en la capital. Volvió a producirse un fuerte aumento en septiembre, mes en el que se denunciaron ante la Misión más de 60 asesinatos o muertes en circunstancias sospechosas ocurridos en Puerto Príncipe. Más de la mitad de ellos se produjeron durante la segunda semana, incluido el fin de semana en el que se perpetró el asesinato de Antoine Izméry, y el número volvió a disminuir en la segunda mitad del mes.

21. La investigación de tales denuncias en Haití presenta grandes dificultades. En la mayoría de los casos no se pone en marcha ninguna investigación judicial una vez el juez de paz local levanta acta de la defunción, ni la policía toma medida alguna para emprender una investigación criminal. Los testigos tienen miedo de comparecer, y los entrevistados por la Misión no han sido muchas veces interrogados por las autoridades competentes. La Misión no tiene acceso a información alguna obtenida mediante las investigaciones oficiales, y en la mayoría de los casos es evidente que no existe tal información. No se realizan autopsias y los cadáveres se entierran tan pronto como el juez de paz levanta acta de la defunción. La Misión entrevista a los testigos y evalúa su credibilidad lo más cuidadosamente posible, pese a lo cual la certidumbre con que puede confirmar los informes relativos a las circunstancias de un asesinato varía, inevitablemente, de forma considerable.

22. En una pequeña parte de los casos, los testigos presenciales entrevistados por la Misión declararon haber visto que las víctimas fueron muertas o aprehendidas por hombres, que bien se identificaron como miembros de la policía, bien llevaban uniformes del ejército o de la policía, o a quienes los testigos creían haber reconocido como destacados miembros de las Fuerzas Armadas:

Andrel Fortune, Las Cahobas, Departamento del Centro

El 16 de agosto, Andrel Fortune fue muerto a tiros después de que dos hombres uniformados irrumpieran por la fuerza en su casa de Las Cahobas, Departamento del Centro. Según testigos presenciales, un cabo del ejército disparó por la espalda contra Andrel Fortune, miembro de la Alliance des organisations populaires de Las Cahobas y de la organización campesina Mouvement des paysans de Papaye (MPP), cuando éste trataba de huir de sus atacantes. Al parecer, poco antes de su ejecución la víctima había tenido una discusión con un sargento. El juez de paz que certificó la defunción declaró que el ejército había ido a detenerle porque la víctima había tenido una pelea con un sargento. Según las autoridades militares de Las Cahobas, el cabo disparó contra Andrel Fortune porque éste había tratado de arrebatarle el arma. En dos ocasiones anteriores, el 25 y el 28 de junio, las autoridades habían intentado detener a Andrel Fortune tras una manifestación en apoyo del Presidente Aristide celebrada durante la noche del 24 al 25 de junio, en el curso de la cual se bloqueó un puente y se quemaron neumáticos.

Marc Baptiste, Miragoâne, Departamento de la Grand'Anse

En Chalon, Miragoâne, Departamento de la Grand'Anse, Marc Baptiste resultó muerto a tiros después de que dos civiles armados, quienes según testigos se identificaron como policías, irrumpieran en su casa a primeras horas de la mañana del 11 de julio, mientras otros tres permanecían en el

exterior. Cuando su hermano, que vive en las cercanías, corrió hacia la casa para prestar auxilio a la familia, esos hombres dispararon contra él.

Jean-Marc Dessources, Puerto Príncipe

Alrededor de las 2 de la madrugada del 14 de julio, dos hombres, que según testigos llevaban uniforme militar, irrumpieron en la casa de Jean-Marc Dessources, conocido partidario del Presidente Aristide, en el barrio de Canapé Vert de Puerto Príncipe. Al parecer, los dos hombres le gritaron "tú estás siempre hablando del regreso de Aristide, pero no vivirás para verlo", le dispararon por la espalda y después lo remataron de un tiro en la cabeza.

Dos cadáveres no identificados, Puerto Príncipe

El 27 de julio se encontraron dos cadáveres que mostraban heridas producidas por arma de fuego cerca del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, en la zona conocida como Village Solidarité. Testigos presenciales de los asesinatos dijeron que entre los autores habían reconocido a dos policías del Service d'investigation et de recherches Anti-gang, unidad de investigación criminal de la policía de Haití, que vivían en la zona y que según se afirmó habían cometido otros abusos.

Christiane Saron, Quartier Morin, Departamento del Norte

Christiane Saron, mujer de 24 años, fue muerta a tiros junto a su casa en el Quartier Morin, Departamento del Norte, alrededor de las 2 de la madrugada del día 13 de agosto, después de que un grupo de seis hombres con uniformes militares allanaran la casa que compartía con unos parientes y exigieran que se les entregara todo el dinero que tuvieran. Según el testimonio de los familiares que sobrevivieron, dos de los hombres portaban revólveres de calibre 0,38 y se dirigían el uno al otro como "sargento" y "cabo". Al oír voces, Christiane Saron entró en la sala de la casa. Entonces, uno de los hombres la arrastró al exterior y le disparó en la cabeza y en el pecho.

Cadáver no identificado, Puerto Príncipe

El 14 de agosto, un policía de uniforme y un civil armado mataron a tiros a un hombre no identificado en Puerto Príncipe, en la zona que se encuentra entre Delmas 2 y 4, en presencia de varios testigos. Los dos asesinos dispararon desde una camioneta Nissan Pathfinder y varios minutos después regresaron al lugar del crimen para rematar al hombre de otros dos disparos.

Ronald Jean-François, Puerto Príncipe

El 16 de septiembre, también en Puerto Príncipe, fue muerto a tiros por un cabo de la policía Ronald Jean-François, miembro de la Fédération des associations réorganisées, tras haber sido sacado de su casa en Ti Ayiti, Cité Soleil, por tres hombres armados vestidos de paisano. Según testigos presenciales, unos adjuntos armados con metralletas Uzi le esperaban fuera de la casa y comenzaron a golpearle mientras le

interrogaban acerca de otras personas que habían participado en la colocación de fotografías del Presidente Aristide varios días antes. Posteriormente lo llevaron a la zona conocida como Soleil 17, donde un cabo de la comisaría de policía de Wharf le disparó varias veces. Según se dijo, en la zona se encontraba otro cabo que no hizo nada por impedir el asesinato.

23. En otros casos, si bien no hubo testigos de los asesinatos, las víctimas habían estado detenidos por las autoridades inmediatamente antes de que se descubrieran sus cadáveres, o bien había otros indicios de que las Fuerzas Armadas podían haberles señalado como objetivos:

Jude Monville y dos cadáveres no identificados, Saint-Marc, Departamento de la Artibonite

El 10 de julio, en una zona del interior cerca de la playa de Kyona en el Departamento del Oeste se encontró, junto con otros dos cadáveres, el que la Misión cree haber sido el cuerpo de Jude Monville, recluso de la prisión de Saint-Marc. A las tres víctimas se les habían vendado los ojos y atado las manos, y los cadáveres presentaban heridas de arma de fuego. Se los enterró en el mismo lugar en el que se los había encontrado, sin que se realizaran autopsias ni se averiguase su identidad. Observadores de la Misión habían visto el día 5 de julio a Jude Monville en la cárcel, de la que debía salir el 10 de julio tras cumplir una sentencia impuesta por habersele encontrado en posesión de una motocicleta robada. Ese día fue sacado de la prisión junto con otro interno que la Misión cree que podría haber sido una de las otras dos víctimas descubiertas el 10 de julio. Dos de las víctimas tenían la cabeza rapada, como es norma entre los reclusos. La familia de Jude Monville ignoraba el paradero de éste desde que se encontraba en la prisión de Saint-Marc, y había recibido información de que había sido asesinado. La Misión presentó a las autoridades judiciales las pruebas que había reunido, que apuntaban de forma vehemente a que una de las víctimas era Jude Monville. No parece que se haya adoptado ninguna medida, ni siquiera que se haya interrogado a las autoridades militares responsables de la prisión de Saint-Marc. Otros tres cadáveres no identificados habían sido descubiertos en la misma zona los días 1 y 3 de julio. Todos ellos presentaban heridas producidas por arma de fuego y habían sido enterrados en el lugar en que fueron encontrados sin que se realizaran autopsias.

Délice Jackie, Puerto Príncipe

El 13 de julio se descubrió en la carretera nacional No. 1 de Puerto Príncipe, en la zona conocida como Sources Puantes, el cadáver acribillado de Délice Jackie. Délice Jackie era primo de Claudy Vilmé, con quien compartía una casa. Claudy Vilmé, fotógrafo, había sido atacado, golpeado y aprehendido por hombres armados el día 2 de julio cuando tomaba fotografías de miembros de las Fuerzas Armadas en una gasolinera durante el embargo de petróleo. Délice Jackie fue a su vez secuestrado por hombres armados el día 10 de julio, poco después de que Claudy Vilmé declarase públicamente que había estado detenido en el viejo Fort-Dimanche, cárcel utilizada durante el régimen de Duvalier y que las Fuerzas Armadas niegan que siga utilizándose con ese fin.

/...

24. En gran número de casos, los testigos presenciales atribuyeron los asesinatos a hombres armados vestidos de paisano y a veces afirmaron que éstos podían ser identificados como auxiliares civiles de las Fuerzas Armadas. En algunos de estos casos, las actividades, afiliación o simpatías que se le conocían a la víctima hacían pensar que había sido señalada como blanco por motivos políticos o que los asesinatos tenían un claro matiz político:

Antoine Izméry y Jean-Claude Maturin, Puerto Príncipe

El caso más evidente y conocido de asesinato político fue el de Antoine Izméry, eminente partidario del Presidente Aristide, el 11 de septiembre. Comerciante acaudalado, el Sr. Izméry había sido uno de los principales contribuyentes a la campaña electoral del Presidente Aristide en 1990. En mayo de 1992, su hermano, Georges Izméry, había sido muerto a tiros cerca de la tienda de la que eran propietarios. En agosto de 1993, Antoine Izméry fundó el Komite mete men pou verite blayi (KOMEVEB) (Comité Conjunto para la Investigación de la Verdad), que organizó varias actividades públicas en apoyo del regreso del Presidente Aristide. El 11 de septiembre, el Sr. Izméry asistía en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Puerto Príncipe, a una misa organizada por el KOMEVEB para conmemorar la matanza, ocurrida en 1988, de la Iglesia de San Juan Bosco (de la que a la sazón era párroco el Padre Aristide) cuando hombres armados que vestían de paisano y llevaban radios lo sacaron de la iglesia mientras que otros hombres armados despejaban la calle próxima, obligando a retirarse a todos los presentes, incluido el vehículo en el que viajaban observadores de la Misión. Antoine Izméry fue obligado a arrodillarse y recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. Momentos después, los mismos hombres armados ejecutaron a otro individuo, Jean-Claude Maturin, a pocos metros de distancia. En el momento en que ocurrían los asesinatos, una nutrida fuerza de policía patrullaba las calles alrededor de la iglesia, pese a lo cual los asesinos abandonaron en automóvil la zona sin ser molestados. Testigos presenciales entrevistados por la Misión han nombrado entre los atacantes a conocidos adjuntos de la policía, y la Misión ha recibido información que corrobora las afirmaciones de que uno de ellos podría haber sido un oficial de una comisaría de Puerto Príncipe.

Jean Eveau Edmond, Puerto Príncipe

Entre varios otros conocidos partidarios del Presidente Aristide o líderes de organizaciones comunitarias asesinados también por civiles armados se encuentra Jean Eveau Edmond, representante local del Front national pour le changement et la démocratie (FNCD). Fue muerto a tiros el 1º de julio por hombres armados vestidos de paisano, en presencia de su familia en su domicilio, del barrio obrero de Carrefour Feuilles de Puerto Príncipe. Según testigos, al abandonar la casa los asesinos gritaban: "¡Victoria! ¡Hemos matado a un Lavalas!".

Cléber Rivage, Edris Bayard y Lévius Brunis, Puerto Príncipe

Al menos tres muertes con una clara motivación política, si bien las víctimas parecen haber sido elegidas al azar, tuvieron lugar en Puerto Príncipe el 8 de septiembre, en el momento de la reinvestidura de Evans Paul, Alcalde electo que fue obligado a abandonar su puesto tras el golpe

de septiembre de 1991. Los asesinatos de Cléber Rivage, Edris Bayard y Lévius Brunis fueron perpetrados cuando una multitud que se había reunido alrededor del Ayuntamiento para expresar su apoyo al Alcalde fue violentamente dispersada por civiles armados con bastones, cuchillos y armas de fuego sin que la policía, que se encontraba presente, interviniese. Muchas otras personas resultaron gravemente heridas. La Misión cree saber que en el informe preliminar preparado por el Commissaire du Gouvernement (Fiscal del Estado) encargado de la investigación de los asesinatos se identificaba a algunos de los hombres armados que los perpetraron como miembros en activo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el commissaire dimitió posteriormente sin presentar informe alguno.

Brivenord Simon, Puerto Príncipe

El 9 de septiembre, el día después de que se cometieran los asesinatos en los alrededores del Ayuntamiento, fue asesinado Brivenord Simon, antiguo cabo del ejército que se había dedicado a los negocios y era amigo personal del Alcalde Evans Paul, por dos civiles armados que lo obligaron a salir de su tienda y le dispararon tres veces junto al mercado Hypolite de Puerto Príncipe.

Laurient Timou, Puerto Príncipe

El 10 de septiembre, Laurient Timou, conocido partidario del Presidente Aristide que vivía cerca del cuartel de Lamentin 54, Carrefour, Puerto Príncipe, fue secuestrado junto con un colega cuando salían de trabajar. Civiles armados se los llevaron en una camioneta. Al día siguiente sus cadáveres, junto con el de una tercera víctima no identificada, fueron encontrados en la carretera nacional en Cité Soleil. Los testigos comunicaron a la Misión que habían visto a ambos junto con un tercer detenido, aún vivos, en poder de civiles armados dentro del Ayuntamiento pocas horas después de su secuestro.

Jonel Jean, Petit-Goâve, Departamento del Oeste

En Tête-à-Boeuf, primera sección comunal de Petit-Goâve en el Departamento del Oeste, Jonel Jean murió a consecuencia de las palizas que recibió cuando un grupo de más de 30 hombres, en su mayoría adjuntos aunque dirigidos por el jefe de policía rural, interrumpieron de forma violenta una reunión del Mouvman peyizan Tèt a Bèf (Movimiento Campesino Tête-à-Boeuf) el 12 de agosto.

25. En el resto de los casos, bien la Misión no pudo obtener detalles sobre las víctimas (en algunos casos ni su identidad), bien de la información disponible no podían deducirse los motivos por los que podían haber sido señalados como blancos, y no había testigos del asesinato o los testigos describieron a los asesinos como civiles armados o "zenglendos". El término "zenglendos" hace referencia a grupos armados criminales, que habitualmente actúan de noche y especialmente en los barrios pobres y en los distritos obreros de Puerto Príncipe. Puede suponerse que parte de esta violencia sea de carácter puramente delictivo, sin motivos políticos. Ahora bien, en Haití está muy extendida la creencia de que incluso los "zenglendos" actúan bajo la protección o con el consentimiento expreso o tácito de la policía y que sus actividades, aunque

incluyen robos a mano armada, podrían estar también encaminadas a intimidar a la población de las localidades que muestran una oposición más firme a las autoridades posteriores al golpe y un más decidido apoyo al regreso del Presidente Aristide. Otros grupos armados parecen ser de naturaleza paramilitar: la Misión ha recibido algunos testimonios fidedignos que vinculan directamente a la policía de Puerto Príncipe, dirigida por el Coronel Michel François, con las actividades sistemáticas de grupos armados que cometen asesinatos arbitrarios. Durante el período a que se refiere el presente informe parece cierto que los grupos armados han venido actuando con impunidad, tanto de día como de noche, sin preocuparse de taparse la cara y sin miedo a disparar cerca de la policía. No hay pruebas de que la policía haya hecho esfuerzo alguno para impedir la serie de crímenes cometidos en Puerto Príncipe ni para investigar casos concretos y hacer comparecer ante la justicia a los responsables. Por lo que la Misión sabe, nadie ha sido detenido y procesado por su participación en ninguno de estos asesinatos en Puerto Príncipe ni en ningún otro lugar del país.

26. La Misión ha intentado obtener toda la información posible acerca de las circunstancias que rodearon todas estas muertes. En algunos casos, la propia Misión ha sido la primera en informar del asesinato a la Policía y a las autoridades judiciales responsables de registrar e investigar la muerte. Cuando la Misión ha dispuesto de información que pudiera haber sido útil en una investigación, la ha puesto en conocimiento de las autoridades. En sus comunicaciones verbales y escritas con las Fuerzas Armadas, la Misión ha instado a que se emprendiesen investigaciones y se adoptaran medidas para impedir las actividades de grupos armados. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas ha reconocido ante la Misión la gravedad de la situación en Puerto Príncipe, pese a lo cual han continuado cometiéndose asesinatos impunemente. Las repetidas solicitudes formuladas por la Misión durante el período a que se refiere el presente informe, tanto directamente como por conducto del Alto Mando, para reunirse con el Jefe de Policía de Puerto Príncipe, responsable directo de la situación en la zona metropolitana, no han sido atendidas.

B. Violaciones del derecho a la integridad física y a la seguridad de la persona

1. Desapariciones forzadas

27. En su informe provisional, la Misión señaló que, sobre la base de la información que había recibido entre el 9 de febrero y el 31 de mayo, no estaba en condiciones de afirmar que la desaparición forzada constituyese una práctica sistemática y masiva en Haití, si bien tenía presentes varios casos de desapariciones ocurridas antes de su llegada y citaba el caso de una desaparición sucedida el 5 de mayo. La víctima, Joseph Winy Brutus, uno de los dirigentes del Parti national démocratique progressiste d'Haïti (PNDPH), que forma parte del FNCD, seguía en paradero desconocido, y no se ha recibido información adicional alguna de las autoridades militares a las que la Misión expuso el caso en mayo.

28. Durante el período a que se refiere el presente informe ha habido indicios de que las desapariciones forzadas en Puerto Príncipe responden a cierto esquema. En los tres meses comprendidos entre junio y agosto se informó a la

/...

misión de 30 desapariciones. Han reaparecido 20 de las víctimas, y su testimonio indica que la mayoría de los casos presentan algunas características comunes.

29. Las víctimas fueron secuestradas en su hogar o en su lugar de trabajo por hombres armados, generalmente un grupo de tres o cuatro hombres con un vehículo privado, para ser transportadas con los ojos vendados y las manos atadas a un lugar de detención secreto. Posteriormente fueron interrogadas acerca de sus actividades, su participación en organizaciones de la comunidad y en manifestaciones y su relación con otros activistas o conocimiento de otros activistas. Algunas víctimas dijeron que sus secuestradores estaban bien organizados, usaban claves para comunicarse delante de sus víctimas y utilizaban radios. Están bien informados de las actividades y contactos de las víctimas y, en algunos casos, mostraron a las víctimas su propia fotografía. En seis casos se interrogó a los detenidos acerca de su relación con Antoine Izméry antes de que éste fuese asesinado el 11 de septiembre. El interrogatorio iba siempre acompañado de palizas y otras formas de tortura. Las personas que reaparecieron estuvieron secuestradas durante varios días antes de ser arrojadas a las calles de Puerto Príncipe.

30. De las 30 víctimas cuyos casos han sido investigados por la Misión, 13 eran miembros de grupos políticos u organizaciones populares o tenían opiniones políticas conocidas, cuatro eran parientes cercanos de activistas y otras dos trabajaban en la organización social Lafanmi Selavi y en la Iglesia de San Juan Bosco, de las cuales el Presidente Aristide era fundador y sacerdote, respectivamente.

31. Los casos siguientes reflejan el procedimiento generalmente seguido en las desapariciones políticas forzadas:

Valéry Pfiffer, Puerto Príncipe

Valéry Pfiffer, miembro de la organización estudiantil Fédération nationale des étudiants haïtiens, fue secuestrado al anochecer del 20 de agosto en Carrefour Péan, Puerto Príncipe, por cuatro civiles armados que le vendaron los ojos y lo condujeron a un lugar desconocido, donde fue atado, golpeado con los puños y con culatas de fusiles e interrogado acerca de sus actividades políticas. Finalmente fue puesto en libertad el 23 de agosto cerca del antiguo Fort-Dimanche. Los médicos de la Misión examinaron sus heridas y consideraron que concordaban con su testimonio.

Ernst Charles, Puerto Príncipe

Ernst Charles, miembro de varias organizaciones populares, entre ellas el Mouvman peyizan Tèt a Bèf, la Ti Legliz ("Pequeña Iglesia", ala de la teología de la liberación de la Iglesia Católica) y la Centrale générale des travailleurs (CGT), organización sindical, fue secuestrado el 21 de agosto en Carrefour, Puerto Príncipe, por siete civiles armados que lo condujeron en una camioneta. Tras vendársele los ojos y ser atado, fue golpeado mientras se lo interrogaba acerca de las organizaciones en las que participaba. Se le mostró una fotografía que se le había tomado cuando tomaba parte en una manifestación. Fue puesto en libertad dos días después cerca de la Cité Militaire y entrevistado por observadores de la Misión.

/...

Sus secuestradores le habían rapado la cabeza, tenía señales de tortura en el cuello, la espalda y las nalgas, y cuando se realizó la entrevista hablaba con dificultad y escupía sangre.

Mujer desaparecida, Departamento del Sur

En el Departamento del Sur, una mujer de 58 años de edad fue secuestrada el 2 de agosto por cinco o seis hombres armados que conducían una camioneta Toyota. Antes de abandonar el lugar, dispararon varios tiros al aire. Según la información recibida por la Misión, los hombres estaban buscando a uno de los hijos de la mujer, miembro de una organización campesina local. Se desconocen la suerte y el paradero de la víctima.

2. Detenciones arbitrarias, encarcelamientos ilegales y torturas

32. Durante el período a que se refiere este informe, la Misión ha recibido información de todo el país sobre varios centenares de casos de detenciones arbitrarias y encarcelamientos ilegales, acompañados en muchos casos por palizas y otros tipos de torturas o malos tratos. Muchas de esas violaciones de los derechos humanos se cometieron cuando las víctimas trataban de ejercer su derecho a la libertad de expresión, en la mayoría de los casos expresando su apoyo al Presidente Aristide. Tal apoyo podía consistir en la distribución de folletos o la colocación de carteles, a menudo con la fotografía del Presidente, o en la organización de manifestaciones o participación en manifestaciones. En algunos casos, las víctimas no hicieron más que decir que apoyaban al Presidente y que eran partidarios de su regreso, o se sospechaba que esa era su posición, o fueron acusadas de falta de respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas. Las víctimas de golpizas y otros tipos de tortura o malos tratos incluyen también a muchas personas acusadas de robo u otros delitos comunes. En algunos casos, las palizas fueron tan grandes que las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas o necesitaron otros tipos de tratamiento médico, y dos personas murieron después de haber sido torturadas.

33. Las principales formas de ataque a la integridad física de las personas detenidas son las siguientes:

a) Palizas. Casi todas las personas detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas, por sus adjuntos, por los jefes de la policía rural y por sus auxiliares fueron rutinariamente golpeadas con palos o culatas de fusiles, o azotadas con sogas o cables. Esas palizas se llevan a cabo en la calle en el momento de la detención, en los puestos o cuarteles militares, en la cárcel y en los domicilios de los jefes de la policía rural. Se golpea cualquier parte del cuerpo - la cabeza, la espalda, las nalgas, el abdomen, etc. - sin tomar en consideración las lesiones que se puedan ocasionar;

b) El "djak". Se atan las manos a los pies de la víctima y se coloca un palo detrás de las rodillas dobladas y sobre los brazos doblados para sujetar firmemente todo el cuerpo en una posición flexionada que expone en particular la espalda y las nalgas. Algunas veces se cuelga del palo a la víctima. La víctima es apaleada fuertemente en esa posición. Como consecuencia de este tipo de palizas y de otros apaleamientos, se ha comprobado que se han causado heridas



graves en las nalgas, que pueden infectarse y que a veces requieren injertos de piel, como lesiones renales;

c) El "kalot marasa". Esta forma corriente de tortura, la "doble bofetada", consiste en golpear simultáneamente ambas orejas de la víctima con las palmas abiertas. Puede ocasionar la perforación de los tímpanos, graves infecciones en los oídos y sordera.

34. La Misión ha recibido informes de todas las regiones sobre casos de torturas y malos tratos graves:

Améius Pierre, Departamento del Nordeste

En el Departamento del Nordeste, Améius Pierre, campesino, fue detenido el 26 de junio por "falta de respeto a un cabo" y conducido al puesto militar de Capotille, donde fue golpeado fuertemente con un machete, en particular en el cuello, y torturado por los procedimientos del djak y del kalot marasa por miembros de las Fuerzas Armadas, cuya identidad es conocida por la Misión. También fue obligado a revolcarse sobre excremento. El 28 de junio fue trasladado a Ouanaminthe, donde estuvo detenido durante varios días antes de ser llevado de nuevo al puesto militar de Capotille y, finalmente, a la prisión de Fort-Liberté. En total, estuvo 25 días detenido ilegalmente sin que se formularan cargos. Tras la intervención de la Misión, fue puesto en libertad el 25 de julio por el commissaire du gouvernement de Fort-Liberté, después de que el cabo que lo acusó y lo detuvo no compareciera ante el tribunal.

Nickson Desrosiers y Ernest Pierre, Puerto Príncipe

El 27 de junio, cuando estaba terminando la misa que se celebraba en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el distrito de Bel-Air de Puerto Príncipe, varias personas distribuyeron volantes y cantaron consignas en apoyo al Presidente Aristide. Varios miembros de las Fuerzas Armadas y civiles armados que se encontraban dentro de la iglesia aprehendieron y golpearon inmediatamente a Nickson Desrosiers, coordinador de Plateforme Fond Saint Clair, organización popular, y a Ernest Pierre, tesorero de la misma organización. Otras cinco personas también fueron detenidas y golpeadas. Los siete detenidos fueron llevados al Service d'investigation et de recherches Anti-gang, donde fueron fuertemente golpeadas durante su interrogatorio.

Valérien Thiophène, Departamento de la Artibonite

El 28 de junio, Valérien Thiophène, de 70 años de edad, estaba sentado junto a su casa en Gonaïves, Departamento de la Artibonite, cuando fue detenido por un soldado, al parecer porque es el padre de un conocido dirigente de una organización popular local que estaba siendo buscado por las fuerzas militares tras una semana de intranquilidad política. El Sr. Thiophène dijo que lo habían llevado hasta debajo de un árbol cercano donde se encontraban otros siete miembros de las Fuerzas Armadas y que lo habían golpeado con palos en las piernas, las costillas, el estómago, la espalda y la cabeza. Después lo obligaron a caminar al cuartel, donde permaneció detenido durante un día.

/...

Pierre Joseph, Departamento de la Grand'Anse

En Jérémie, Departamento de la Grand'Anse, Pierre Joseph, empleado del Ministerio de Agricultura y conocido también como partidario del Presidente Aristide, fue detenido el 7 de julio por miembros de las Fuerzas Armadas que lo acusaron de haberse comportado de forma "impertinente e insolente" con ellos. Fue torturado por el método del djak y, según la víctima, un oficial del cuartel militar de Jérémie le dio 60 golpes con un palo. Cuando compareció ante el juez dos días después, no podía mantenerse en pie y cayó al suelo. El juez lo envió a un hospital, donde recibió tratamiento médico. Cuando se volvió a presentar ante el tribunal el 20 de julio, acusó al comandante de subdistrito de Jérémie de haberlo torturado.

Jean Dominique y Jean-Marie Exil, Puerto Príncipe

El 14 de julio por la noche, Jean Dominique y Jean-Marie Exil, miembros de la Asamble popilè Sen-Maten (Asamblea Popular de San Martín), fueron detenidos por civiles armados cuando distribuían folletos en conmemoración del 40º cumpleaños del Presidente Aristide y fueron conducidos a la estación de policía Cafétéria en Puerto Príncipe, donde fueron torturados por el procedimiento del kalot marasa y apaleados. Al día siguiente fueron presentados a un juez de paz, acusados de "distribuir folletos y alterar el orden público". Fueron llevados a la Penitenciaría Nacional y puestos en libertad el 20 de julio.

Jean Lavel Beaucejour, Departamento del Sur

En Les Cayes, Departamento del Sur, Jean Lavel Beaucejour, miembro de la Organisation politique Lavalas (OPL), fue detenido fuertemente y golpeado el 2 de septiembre después de haber colocado fotografías del Presidente Aristide en la ciudad. Presentado ante el tribunal y acusado de "alterar el orden público" y de otros delitos el 3 de septiembre, fue hospitalizado a consecuencia de las palizas que había recibido. La Misión tomó disposiciones para que un doctor lo visitara cuando estaba detenido.

35. Según se informó a la Misión durante el período que se examina, dos personas murieron a causa de las torturas a que se los había sometido:

Chantal Bien-Aimé, Puerto Príncipe

En junio, la Misión tuvo conocimiento de la muerte de Chantal Bien-Aimé, de 28 años, madre de dos hijos y miembro de la Asamble popilè Sen-Maten, como consecuencia de torturas. Según el testimonio de sus familiares, había sido detenida el 11 de mayo en el mercado de Tête Boeuf en Puerto Príncipe y conducida a la cuarta comisaría de policía, conocida comúnmente como Cafétéria. Acusada de distribuir folletos en apoyo al Presidente Aristide, fue golpeada en la cabeza y el estómago. Después de ser puesta en libertad el 12 de mayo, se quejó de dolores en el abdomen y de contusiones en diferentes partes del cuerpo. Murió el 16 de mayo. Los familiares que se pusieron en contacto con la Misión fueron amenazados inmediatamente. El 31 de mayo, alrededor de la una de la mañana, cuatro hombres allanaron y registraron la vivienda de Chantal Bien-Aimé, mientras

/...

seis hombres fuertemente armados vigilaban afuera. Uno de ellos vestía uniforme kaki. Los ocupantes de la vivienda informaron de que habían sido golpeados e interrogados acerca de su contacto con los observadores de la Misión.

Bruno Devonville, Cap-Haïtien, Departamento del Norte

En la noche del 17 al 18 de julio, Bruno Devonville, estudiante, fue detenido por un soldado y dos adjuntos y quedó detenido en el puesto militar del distrito de Cité Champin de Cap-Haïtien, Departamento del Norte. Según la información recibida por la Misión, fue golpeado durante dos horas y después arrojado a la calle, donde lo encontraron unos transeúntes. Murió poco después.

36. La Misión ha sido informada de varios casos graves de violencia contra mujeres, en particular mujeres seleccionadas como blanco a causa de sus actividades o afiliaciones políticas o a causa de las actividades o afiliaciones políticas de sus esposos, y mujeres acusadas de delitos comunes. Una mujer abortó después de haber sido golpeada. Tres mujeres denunciaron que habían sido violadas y una denunció una tentativa de violación. Ya se han mencionado los casos de una mujer que, según se informó, habría sido asesinada a tiros por hombres de uniforme militar, de una mujer que, según se comunicó, había desaparecido y de una mujer que al parecer murió como resultado de torturas.

Niña de 13 años, Bayeux, Departamento del Norte

El 10 de junio por la tarde, una niña de 13 años pasaba por delante del puesto militar en Bayeux, Departamento del Norte, camino de su casa, cuando un cabo la obligó a entrar en el puesto, la echó sobre una cama y la violó. Después la dejó marcharse. Cuando la niña llegó a casa, contó a su madre lo que había sucedido. Su madre fue inmediatamente a hablar con el cabo, quien amenazó con golpear a la madre y la hija. El 12 de junio, el cabo acusó a la madre de difamación e intentó detenerla. Las autoridades militares trataron inicialmente de rechazar el cargo de violación diciendo que la niña no era virgen. El caso fue remitido a Radio Soleil y el cabo fue finalmente castigado por sus superiores con un arresto de 10 días.

Esposa de un miembro de una organización popular, Cité Soleil, Puerto Príncipe

El 24 de julio, alrededor de la una de la mañana, un grupo que, según se dijo, estaba integrado por unos 20 hombres armados, entre ellos hombres de uniforme, rodearon en Cité Soleil, Puerto Príncipe, la vivienda de una mujer cuyo esposo, activista de una organización popular, vivía oculto lejos del hogar y era buscado por la policía. Después de allanar por la fuerza el domicilio, tres de ellos, por turno, amenazaron a la mujer con las armas y la violaron.

Muchacha de 16 años, Departamento del Nordeste

En Dérac, Departamento del Nordeste, una muchacha de 16 años denunció a la Misión que había sido violada por un soldado del cuartel de Fort-Liberté. Los observadores de la Misión vieron que la niña caminaba

con dificultad, y en un certificado médico extendido por un doctor del hospital local se llegó a la conclusión de que "el diagnóstico clínico de violación es indudable". La familia de la víctima presentó ese certificado y otras pruebas al comandante regional, quien prometió que ordenaría que se hiciera una investigación. El soldado estuvo detenido unos días y después fue puesto en libertad. Desde entonces se le ha visto de uniforme circulando libremente por la zona.

Monique Brégard, Jérémie, Departamento de la Grand'Anse

El 18 de julio, en Jérémie, Departamento de la Grand'Anse, Monique Brégard, de 23 años de edad, fue detenida en su domicilio por tres soldados porque el hermano de uno de ellos la había acusado de haberle hurtado dinero. Pese a que estaba embarazada, recibió fuertes palizas, particularmente en la espalda, tanto en un puesto de avanzada como en el cuartel de Jérémie, y abortó después de ser trasladada a la cárcel. Finalmente, tras la intervención de los observadores de la Misión, fue hospitalizada. Cuando se hizo público el trato que se le había dado, las Fuerzas Armadas alegaron que Monique Brégard había tenido un aborto. Los amigos y familiares de la mujer han sido amenazados varias veces por los soldados, y ella se ha ocultado porque teme por su seguridad.

Ailène Latortue, Departamento del Centro

El 12 de agosto, en el distrito de Cerca-la-Source (Departamento del Centro), Ailène Latortue, de 26 años de edad y madre de dos hijos, fue detenida sin orden judicial por militares y sus adjuntos que buscaban a Jocelyn Pierre, prima de ella y partidaria del Presidente Aristide. Acusada de pertenecer a una familia lavalassienne, fue derribada a golpes al suelo con su hija pequeña en brazos y la apalearon. También la sometieron a la tortura kalot marasa y la tuvieron detenida sin ningún tipo de proceso en el cuartel Thomassique hasta que un juez ordenó que fuera puesta en libertad el 19 de agosto. De regreso a su domicilio, fue detenida nuevamente el mismo día por un soldado que, al parecer, la obligó a pagar 80 dólares haitianos por su libertad. Los observadores de la Misión que la entrevistaron después de ser puesta en libertad observaron las huellas de la paliza que todavía tenía en el cuello y el costado del cuerpo.

37. Cada vez que se anuncia que una persona ha sido detenida por motivos políticos o que ha sido sometida a tortura o malos tratos, la Misión solicita inmediatamente información a las autoridades locales. Esta medida incluye generalmente la investigación de las acusaciones formuladas contra la persona detenida y si se requería y había sido expedida una orden de detención; el contacto inmediato con la persona detenida; la exhortación de que se respete su integridad física y de que la pase un reconocimiento o tratamiento médico en caso necesario, y el recordatorio a los responsables de que el derecho haitiano estipula que la persona detenida sea presentada a un juez de paz en un plazo de 48 horas. En una proporción considerable de casos, las peticiones de la Misión han dado lugar a la pronta puesta en libertad de la persona por las Fuerzas Armadas o a su presentación al juez de paz, quien ha ordenado la puesta en libertad. Cuando es posible la Misión ayuda a las personas detenidas para que tengan asistencia jurídica y está presente en el juicio. En muchos casos se ha

denegado a la Misión el contacto inmediato con la persona detenida, como se estipula en el acuerdo concertado con las autoridades de facto, y ésta ha sido víctima de palizas u otro tipo de tortura o malos tratos antes de ser visitada por la Misión. Cuando ha sido posible, la Misión ha ayudado a esas personas a recibir tratamiento médico, incluido su traslado al hospital en varios casos.

38. La Misión envía información relativa a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos a los comandantes locales de las Fuerzas Armadas, incluidos los nombres de miembros de las Fuerzas Armadas o de personas relacionadas con ellos que han sido identificados como responsables por las víctimas, e insta a que se realicen investigaciones y se apliquen sanciones contra cualquier persona cuya responsabilidad se compruebe. También se ha informado al Alto Comando de las Fuerzas Armadas sobre algunos de los casos más graves. En algunos casos se han recibido la promesa de realizar investigaciones y tomar medidas contra los responsables, pero la Misión rara vez ha sido informada de los resultados. Sin embargo, las autoridades niegan frecuentemente que haya habido palizas. Casi todas las personas identificadas por la Misión como responsables han permanecido en sus puestos y algunos comandantes locales han defendido la práctica de la paliza arguyendo que es necesaria debido a la debilidad del sistema judicial. Desde que la Misión ha estado presente, en algunos lugares han disminuido las palizas de personas bajo custodia militar y algunas personas detenidas han sido puestas en libertad sin haber sido maltratadas; sin embargo, en otros lugares se siguen recibiendo periódicamente comunicaciones de que siguen dándose palizas severas a personas bajo custodia. Existen indicaciones de que, como cambio ante la presencia de la Misión, en algunas zonas se han sustituido las palizas infligidas a personas bajo custodia por palizas infligidas por adjuntos sin detener a la víctima.

### 3. Seguridad física

39. Muchas personas han indicado a la Misión que han sido objeto de amenazas de muerte o de violencia física por miembros de las Fuerzas Armadas o personas vinculadas con ellos, y muchas han considerado necesario vivir en la clandestinidad (marronage) lejos de su hogar. En todas las regiones se han planteado estos casos, aunque con frecuencia diversa, y es indudable que el número de personas que han estado en contacto con la Misión es una proporción reducida del total de las personas que viven en la clandestinidad. Un número relativamente pequeño de personas han comunicado a la Misión que tienen el propósito de regresar o que han regresado a sus hogares y la Misión se ha mantenido en contacto con ellas cuando lo han solicitado. Algunas de las personas que habían regresado han vuelto a vivir en la clandestinidad tras recibir nuevas amenazas, mientras que otras han tenido que hacerlo por primera vez durante el período que abarca el presente informe.

40. La Misión está preocupada en particular por las persistentes amenazas formuladas contra personas, debido aparentemente a su contacto con la Misión o a que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos que han sido dadas a conocer por la Misión o por otras personas. Según se informa, Monique Bregard, Pierre Joseph y Claudy Vilmé, cuyos casos se han descrito anteriormente, son buscados por miembros de las Fuerzas Armadas o personas relacionadas con éstos, después de que se dio a conocer su trato debido a la notoriedad de sus casos. Todos ellos viven en la clandestinidad, pues temen por

/...

su seguridad. Como ya se ha descrito, Délice Jackie, prima de Claudy Vilmé, fue secuestrada y asesinada poco después de que Vilmé declarase públicamente que había estado detenido en un lugar secreto.

41. En el mandato de la Misión reconocido por las autoridades de facto, las autoridades haitianas se comprometen a velar por la seguridad de las personas que hayan transmitido información a la Misión, prestado testimonio o presentado pruebas de cualquier tipo. Sin embargo, en la práctica muchas personas han sido amenazadas por miembros de las Fuerzas Armadas y personas relacionadas con ellos por haber estado en contacto con la Misión:

Pedro Georges, Limbé, Departamento del Norte

Pedro Georges, joven muy conocido por apoyar al Presidente Aristide, fue objeto de amenazas después de comunicar a la oficina de la Misión en Cap-Haïtien que el 3 de julio había sido golpeado por un cabo uniformado en la zona de Limbé, Departamento del Norte. El 18 de julio, el mismo cabo, acompañado de adjuntos, todos ellos armados con palos y piedras, se dirigieron al domicilio de Pedro Georges y comenzaron a tirar piedras contra la vivienda; al mismo tiempo le amenazaron de muerte por haber visitado la oficina de la Misión. El 23 de julio Georges fue amenazado de nuevo por el cabo y sus adjuntos. El 30 de julio fue detenido y un adjunto le acusó de intentar asesinar a su vecino e incendiar la vivienda de éste, pero el 2 de agosto fue puesto en libertad sin que se le acusara de nada.

Jean Monack, Saint Raphael, Departamento del Norte

El 4 de agosto, Jean Monack, Alcalde adjunto de Saint-Rapahel (Departamento del Norte) regresaba de la oficina de la Misión en Cap-Haïtien, donde había informado acerca de la detención de un colega, cuando a dos manzanas de distancia de la oficina se detuvo frente a él una camioneta sin matrícula. Los tres ocupantes del vehículo lo acusaron de informar a la Misión y trataron de obligarlo a entrar en el vehículo. El Alcalde adjunto pudo escapar por una bocacalle.

Arry Marsan, Port-à-Piment, Departamento del Sur

Durante la noche del 12 al 13 de agosto se hicieron disparos contra el domicilio de Arry Marsan, abogado y maestro que es miembro de la Organisation solidarité pour le retour à la démocratie (OSRD). En la mañana del 12 de agosto, la OSRD había sido uno de los principales organizadores de una reunión pública para examinar la situación de los derechos humanos, en la que él había tomado la palabra y a la que había asistido la Misión. Pese a las promesas de las autoridades de investigar los disparos, hasta el momento no se ha comunicado de ningún resultado.

Alcalde adjunto de Saut-d'Eau, Departamento del Centro

El 10 de septiembre, el Alcalde adjunto de Saut-d'Eau (Departamento del Centro) fue detenido sin orden de detención después de que el comandante le amenazara con detenerlo, en presencia de observadores de la Misión, acusándolo de haber informado a la Misión de la detención arbitraria el día anterior de una mujer que había declarado públicamente

que la situación cambiaría con el retorno del Presidente Aristide. Fue puesto en libertad el día siguiente.

42. Las amenazas contra la seguridad física se relacionan en muchos casos con las actividades políticas o la supuesta opinión política de las víctimas. Durante septiembre aumentó la preocupación como resultado de diversas informaciones sobre la circulación de listas de personas que iban a ser atacadas antes del 30 de octubre. En las listas había activistas políticos, sacerdotes y periodistas.

43. En otros casos comunicados a la Misión, la amenaza de violencia se relaciona con querellas relativas a terrenos, problemas entre personas o extorsiones. La Misión ha recibido muchos informes de que los jefes de la policía rural y sus adjuntos han dado palizas o han cometido otros tipos de malos tratos acompañados a veces de arrestos arbitrarios, o han amenazado con tomar tales medidas, pidiendo dinero para poner en libertad a la víctima o evitar los malos tratos físicos.

C. Violaciones de los derechos de libertad de expresión y de asociación

44. Como ya se ha señalado, cabe considerar - con diferentes grados de certeza en cada caso - que muchas de las víctimas de violaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad y la seguridad de la persona han sido atacadas por opiniones y actividades políticas, es decir, en violación también de su derecho de libertad de expresión y de asociación. La Misión se ha ocupado también de las violaciones de estos últimos derechos en dos contextos especiales: la reacción de las Fuerzas Armadas ante los intentos de organización de manifestaciones públicas, y las violaciones de los derechos humanos cometidas en la práctica o en forma de amenazas contra periodistas.

1. Manifestaciones y otras actividades públicas

45. El artículo 31 de la Constitución de 1987 de Haití garantiza la libertad de asociación y la libertad de reunión - sin armas - con fines pacíficos, políticos, económicos, sociales, culturales y de todo tipo. El inciso 2) del artículo 31 de la Constitución dispone que se notifique previamente a la policía acerca de las reuniones que se celebren en un lugar público. Un decreto de julio de 1987 estipula que el que organice una reunión de más de 20 personas en un lugar público debe notificárselo a las autoridades por lo menos con 48 horas de antelación, además de dar cierto tipo de información, sin la cual se prohíbe la reunión. Sin embargo, conforme al derecho internacional, el derecho de reunión pacífica sólo puede estar subordinado a las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática en bien de la seguridad nacional o de la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la moral pública, o la protección de los derechos y las libertades de terceros. En todo caso, conforme al Código Penal de Haití, la participación en una manifestación que no ha sido notificada con antelación no constituye un delito y ninguna ley dispone la detención o el procesamiento de los organizadores de una manifestación o de sus participantes a menos que se les considere responsables de actos de violencia y otros actos criminales que pudieran ocurrir en relación

/...

con la manifestación. Los Principios Básicos de la Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley disponen que la fuerza debe constituir una medida excepcional que se puede aplicar sólo como último recurso y que no debe emplearse para dispersar a manifestantes pacíficos, aún cuando no se haya autorizado la manifestación.

46. En la práctica, si bien las Fuerzas Armadas no han recurrido a la fuerza para dispersar las pocas manifestaciones de oposición al regreso del Presidente Aristide ni han detenido a los organizadores, en cambio han demostrado que se niegan a permitir manifestaciones en apoyo de su regreso, y en la mayoría de los casos quienes trataban de organizarlas no lo han notificado con antelación. En el período que abarca el presente informe se han observado tres etapas en cuanto a la reacción a esos intentos de manifestación: inmediatamente antes de las negociaciones celebradas en la Isla Governors y después de ellas, hubo varios intentos de manifestación que fueron dispersadas por la fuerza y en los que algunos participantes fueron detenidos y apaleados. Después de la firma del Acuerdo se redujo la tensión y las Fuerzas Armadas moderaron en gran medida su reacción ante pequeñas manifestaciones celebradas en Puerto Príncipe y Gonaïves, la mayoría de las cuales se dispersaron sin ningún tipo de intervención o fueron dispersadas sin detenciones ni palizas. Sin embargo, a mediados de julio, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas reiteró que no se tolerarían manifestaciones en la calle y dijo: "El período que vivimos no se presta a manifestaciones. Se debe crear una atmósfera de paz para el regreso físico de Aristide". En agosto y a principios de septiembre, partidarios del Presidente Aristide intentaron poner a prueba la reacción de las Fuerzas Armadas de diversas maneras, aún en lugares públicos, expresando apoyo al retorno del Presidente, pero tales intentos fueron reprimidos. La matanza ocurrida afuera del ayuntamiento de Puerto Príncipe el 8 de septiembre y el asesinato de Antoine Izméry el 11 de septiembre consiguieron crear una atmósfera de temor en la cual no se intentó llevar a cabo durante las dos semanas siguientes ninguna manifestación pública en apoyo del Presidente Aristide. Sin embargo, grupos hostiles de manifestantes pudieron invadir en dos ocasiones el Ministerio de Finanzas y perturbar la entrega del cargo al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores por parte del Primer Ministro, y en el centro de Puerto Príncipe se permitió una gran concentración pública de supuestos partidarios de Duvalier el 22 de septiembre.

47. El 24 de junio se convocó una huelga general en Puerto Príncipe. Elysée Saintvil fue detenido en su domicilio; acusado de haber tomado parte en una reunión de apoyo al Presidente Aristide, fue conducido al puesto de avanzada de Cité Soleil, donde un sargento le apaleó antes de ser puesto en libertad sin que se le formularan acusaciones. Algunos jóvenes también fueron expulsados por la policía del mismo puesto de avanzada y uno de ellos, Michel Saint Juste, fue apaleado en la calle.

48. A fines de junio hubo varios intentos de manifestaciones públicas en Gonaïves, población principal del Departamento de l'Artibonite. Los días 22 y 23 de junio, personal militar armado con garrotes dispersó violentamente los intentos de celebrar manifestaciones. Tres días después, el 26 de junio, la policía militar llevó a cabo registros en las zonas más pobres de la ciudad, buscando a dirigentes de organizaciones populares relacionados con los intentos de manifestaciones, durante los cuales fueron apaleadas por lo menos nueve personas, y el 28 de junio fue detenida y golpeada una persona de 70 años de



edad, padre de uno de esos dirigentes. El 28 de junio, la policía dispersó una manifestación cerca del mercado Cité Soleil en Puerto Príncipe, después de la cual fue detenido y apaleado severamente Vesnel François, miembro de la Plateforme des organisations populaires de Cité Soleil. No se permitió que los observadores de la Misión visitaran al detenido hasta que fue trasladado al hospital para ser tratado de las lesiones que había sufrido, incluidas fracturas de brazos y muñecas. Se le acusó de agredir a un oficial de la policía y contestó que había sido en defensa propia, cuando era apaleado en el momento de su detención. El 29 de junio, 13 personas, en su mayoría miembros del Mouvement des paysans de Papaye, fueron detenidas en Zabricot, Departamento del Centro, y acusadas inicialmente de organizar una manifestación para pedir el regreso del jefe de la policía rural nombrado por el Gobierno del Presidente Aristide. Los detenidos recibieron culatazos y palos en el cuartel de Hinche y fueron sometidos a la tortura del kalot marasa; posteriormente fueron presentados al juez de paz, que los acusó de "perturbar el orden público", y finalmente fueron puestos en libertad los días 5 y 6 de julio. Mientras tanto, en Les Cayes (Departamento del Sur), una manifestación convocada el 1º de julio por la organización popular Tèt Kole Nan Sid fue dispersada violentamente y varios manifestantes fueron apaleados. Observadores de la Misión lograron ponerse en contacto con tres personas detenidas que habían sido acusadas de organizar la manifestación. Una de ellas había sufrido graves lesiones y la Misión pudo lograr que recibiera tratamiento médico.

49. El 10 de julio hubo una excepción a la regla de moderación que se venía observando desde el Acuerdo de Isla Governors: en una manifestación organizada en la Iglesia de San Juan Bosco en Puerto Príncipe, uno de los manifestantes fue detenido por civiles armados que lo condujeron en un vehículo sin matrícula a la comisaría de policía de Cafétéria, donde la policía le propinó una fuerte paliza. La tensión política en Puerto Príncipe se agravó cuando el 17 de agosto KOMEVEB se dedicó pacíficamente a colocar fotografías del Presidente Aristide en el suburbio de Pétion-Ville en Puerto Príncipe, actividad que había anunciado con antelación. Los participantes fueron dispersados prontamente por policías y sus adjuntos civiles, quienes detuvieron a tres personas. Uno de los detenidos era el Padre Yvon Massac, fundador con Antoine Izméry de KOMEVEB, a quien se acusó de robar un reloj a un transeúnte. Días después fueron puestas en libertad las tres personas sin que se formularan acusaciones contra ellas. El 2 de septiembre, en Puerto Príncipe, poco después de que entrara en funciones el Gobierno del Sr. Robert Malval, un grupo de hombres vestidos de civil y armados con palos dispersaron violentamente a la muchedumbre que se había congregado fuera del Palacio Nacional y que estaba entonando estribillos de apoyo al Presidente Aristide.

50. La Misión, de conformidad con su mandato que dispone que sus miembros pueden observar las manifestaciones pero no deben participar ni colaborar en ellas, ha estado presente cuando se le ha anunciado con antelación que iba a haber una o ha acudido lo más pronto posible tras enterarse de que estaba teniendo lugar. Dicho mandato ha sido acatado estrictamente por los observadores de la Misión en todos los casos, pero no se ha podido evitar que se acuse a la Misión de fomentar las manifestaciones en las declaraciones hechas por los medios de comunicación estatales y en otras declaraciones. Aunque en ocasiones se ha golpeado y detenido a manifestantes pacíficos en presencia de la Misión, su presencia ha reducido probablemente el número de violaciones de los derechos humanos relacionados con las manifestaciones y la Misión ha tenido

cierto éxito en sus intervenciones efectuadas inmediatamente después de las manifestaciones con el propósito de lograr que se pusiera en libertad a las personas detenidas y que se respetara su integridad física. Sin embargo, la Misión no ha podido persuadir a las Fuerzas Armadas de que respeten el derecho de asociación pacífica cuando no estaban de acuerdo con las opiniones que se expresaban.

## 2. Libertad de los medios de difusión

51. En su informe provisional (A/47/960 y Corr.1), la Misión describió los ataques cometidos contra periodistas de prensa y radio y señaló que 20 meses después del golpe de Estado de septiembre de 1991 y tres meses después del envío de la Misión no se observaba ninguna mejora concreta en relación con la libertad de expresión de los medios de difusión. Desde junio han aumentado las violaciones de la seguridad personal de los periodistas y ha proseguido la represión sistemática de los corresponsales de radio en varias provincias. Pese a esa represión, los sectores independientes de los medios de difusión haitianos han informado más abiertamente sobre los acontecimientos políticos y han aumentado sus reportajes sobre las violaciones de los derechos humanos, incluyendo en ellos las declaraciones de la Misión.

52. Durante las negociaciones de la Isla Governors se desarrolló una intensa campaña de intimidación contra los medios de difusión independientes a raíz de que los periodistas informaran sobre los ataques contra tentativas de manifestarse y sobre otras violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante ese período de gran tensión política. Esas actividades coincidieron con una campaña contra la Misión realizada por la televisión y la radio estatales. El Ministro de Información de facto convocó a un grupo de periodistas haitianos y extranjeros para quejarse de sus reportajes y el director de noticias de Radio Metropole recibió órdenes de que se presentara en la oficina del Jefe de Policía de Puerto Príncipe. Las emisoras de radio de la capital fueron amenazadas diariamente, y en nombre de una organización denominada Liberté ou la mort (Libertad o muerte) se distribuyó una lista negra de 24 periodistas. Durante este período, Claudy Vilmé, fotógrafo de Le Nouvelliste, fue secuestrado y detenido en un lugar secreto, y poco después fue secuestrada y asesinada su prima Délice Jackie.

53. Posteriormente, varios fotógrafos de prensa fueron víctimas de actos de violencia mientras trabajaban en Puerto Príncipe y civiles armados amenazaron a los reporteros encargados de informar sobre los acontecimientos políticos, incluidos dos corresponsales extranjeros. Un número cada vez mayor de periodistas de Puerto Príncipe consideraron que era necesario vivir en la clandestinidad. La Misión se enteró de que dos fotógrafos, un periodista y tres reporteros de radio vivían en la clandestinidad a principios de septiembre después de que policías uniformados y civiles armados visitaran sus domicilios y les amenazaran. A principios de septiembre, las amenazas contra los periodistas en Puerto Príncipe alcanzaron tal nivel que una emisora de radio, Radio Caraïbes, suspendió la transmisión de noticias y su director abandonó el país tras recibir amenazas de muerte. Otra estación, Radio Tropique FM, dirigió una carta abierta al Jefe de la Policía en la que indicó que había recibido reiteradas amenazas anónimas que anunciaban un plan para "liquidar" a su personal.

54. En muchas provincias prosiguió la suspensión casi total de la emisión de noticias. Las amenazas de muerte impidieron que dos corresponsales de radio reanudaran su labor en Port-de-Paix, Departamento del Noroeste; tres reporteros de radio fueron buscados por soldados y civiles armados en Jérémie, Departamento de la Grand'Anse, y un corresponsal fue buscado por las fuerzas militares y otro fue detenido brevemente en Léogâne, Departamento del Oeste.

55. El semanario en créole Libète, que apoya al Presidente Aristide, sigue siendo objeto de ataques. Sus vendedores callejeros y sus informantes han sido amenazados una y otra vez, golpeados y detenidos en el campo y también durante períodos de gran tensión en Puerto Príncipe.

#### D. Condiciones de detención

56. Conforme a sus atribuciones, la Misión puede dirigirse inmediatamente a cualquier sitio o establecimiento en relación con el cual se hayan denunciado posibles violaciones de los derechos humanos y "entrevistar libre y privadamente a cualquier persona, grupo e integrante de entidad o institución". Habida cuenta de los numerosos informes sobre encarcelamientos ilegales, palizas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos, la Misión ha procurado visitar cárceles y otros lugares de detención desde el comienzo de su actuación.

57. Todos los lugares de detención están a cargo de las Fuerzas Armadas de Haití. En virtud de las funciones policiales de las Fuerzas Armadas, se retiene inicialmente a las personas arrestadas en el puesto o cuartel local del ejército. De conformidad con la ley de Haití, los detenidos no pueden pasar más de 48 horas sin ser trasladados a una cárcel civil. Hay 15 cárceles civiles en Haití, incluida la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. En la práctica se sigue manteniendo a muchos detenidos en los cuarteles o en los puestos militares durante todo su encarcelamiento, que puede durar varios meses. Las Fuerzas Armadas también se encargan de la administración de las cárceles civiles; su Comandante en Jefe ha comunicado a la Misión que el Alto Mando desea que se transfiera lo antes posible esa función a la administración civil.

58. Según la ley, los commissaires du gouvernement tienen la obligación de asegurar que los lugares de detención sean limpios y que la salud de los presos no se vea perjudicada por las condiciones de su detención. Junto con otros funcionarios judiciales locales, tienen la obligación de visitar todos los meses los lugares de detención. En la práctica, los commissaires du gouvernement rara vez cumplen esa obligación y, de hacerlo, a veces tropiezan con obstáculos interpuestos por las autoridades militares.

59. La Misión ha tenido dificultades para visitar periódicamente todas las cárceles y todos los lugares de detención. En principio, las Fuerzas Armadas reconocen que el mandato de la Misión le confiere el derecho a entrevistarse de forma inmediata y confidencial con cualquier detenido que estime que ha podido ser víctima de una violación de los derechos humanos según su mandato; ahora bien, en la práctica el ejercicio de este derecho se ha visto obstaculizado con frecuencia. No obstante, las Fuerzas Armadas aducen que el mandato de la Misión no le da derecho a visitar a título general y sin previo aviso las cárceles y los lugares de detención, aunque la Misión puede obtener autorización para

hacerlo previa solicitud a las autoridades. En la práctica, la experiencia de la Misión ha variado considerablemente según el lugar que se proponía visitar y el momento de la visita, en función de la actitud de los oficiales locales de las Fuerzas Armadas que ostentaban el mando. La Misión ha tropezado con especiales dificultades en Puerto Príncipe, donde se le denegó la posibilidad de entrevistarse inmediatamente con algunos detenidos tras su arresto o se le impidió que tuviera acceso amplio a varios lugares de detención.

60. En los tres meses comprendidos entre junio y agosto los observadores de la Misión hicieron 30 visitas de carácter general a lugares de detención en todo Haití, en las que anotaron la identidad de 648 personas detenidas en el momento en que se hicieron las visitas. En la mayoría de los casos, ni siquiera existía un registro rudimentario de prisioneros, a pesar de que la ley de Haití exige que en cada distrito judicial se lleve un registro especial de los detenidos pendientes de juicio y de los presos sentenciados que están cumpliendo condena. La mayoría de los detenidos entrevistados habían sido encarcelados sin que se observaran los procedimientos judiciales adecuados; algunos llevaban más de un año en la cárcel sin haber recibido asistencia letrada. Muchos dijeron a los observadores que se les pedían sumas de dinero que estaban fuera de su alcance a cambio de la libertad. La Misión señaló a la atención de las autoridades militares responsables del lugar de detención y al commissaire du gouvernement correspondiente muchos casos de detención ilegal, especialmente los de aquellos detenidos que llevaban largos períodos encarcelados. Como consecuencia de ello, algunos presos fueron liberados.

61. Las condiciones de detención observadas por la Misión eran deplorables. En muchos casos los presos estaban hacinados en celdas a pesar de que había más sitio disponible para alojarlos. Las condiciones sanitarias eran horribles. Los fondos de que disponen las Fuerzas Armadas para el cuidado de los presos son muy insuficientes; para colmo, pocos de estos recursos parecen destinarse a atender las necesidades de los presos que, en general, sólo reciben los alimentos que aportan sus familias. Se dijo que las palizas eran cosa habitual y que a algunos presos se les habían impuesto condiciones deliberadamente crueles como medida disciplinaria. Algunos presos se hallaban en estado avanzado de desnutrición. No se administraba tratamiento médico a muchos presos que lo necesitaban, en muchos casos por las heridas que decían haber recibido en las palizas recibidas durante la detención. En el caso de varios presos, la Misión tomó medidas para su traslado a un hospital, o para que se los liberara para recibir tratamiento médico o se les administrara ese tratamiento en el lugar de detención. Se comunicó a la Misión que había habido varias muertes de resultas de estas condiciones.

62. Hasta el momento, la labor de la Misión ha contribuido a la liberación de algunos presos y al relativo alivio de la situación de otros. La situación actual es producto de decenios de negligencia por parte de los sucesivos gobiernos, y no existe únicamente desde el golpe de Estado de septiembre de 1991. En el Pacto de Nueva York se insta a las fuerzas políticas firmantes a que "se reexamine la situación de los presos en todo el territorio haitiano, mediante un procedimiento acelerado" y a que se adopte una nueva ley relativa a la administración carcelaria. Actualmente, la Misión delibera con el Gobierno constitucional acerca del mejoramiento de sus visitas periódicas a los lugares de detención y acerca de la función inmediata que pueden desempeñar sus observadores hasta que se inicie un programa de reforma.

V. RESPUESTA A LA LABOR DE LA MISION

1. Relaciones con las Fuerzas Armadas de Haití

63. El mandato de la Misión le exige que ponga en conocimiento de las autoridades de Haití sus preocupaciones respecto de las violaciones de los derechos humanos y que tenga en cuenta su respuesta a la hora de preparar sus informes y conclusiones. Exige asimismo que las autoridades de Haití faciliten cualquier información que les sea asequible por la Misión en relación con el desempeño de su cometido. Aunque la Misión mantuvo contactos con el Ministro de Relaciones Exteriores de facto, las autoridades civiles de facto no estuvieron en condiciones de responder de forma útil a las preocupaciones de la Misión en materia de derechos humanos. En este contexto, la Misión ha procurado establecer un buen diálogo con las Fuerzas Armadas en los planos nacional, regional y local. A petición suya, ha sido recibida por el Comandante en Jefe y por el Alto Mando, que también establecieron cauces para las comunicaciones más urgentes o periódicas. Por lo general, ha tenido acceso inmediato a los mandos regionales y locales de las provincias, aunque en ocasiones éstos parecen haber evitado deliberadamente las reuniones. Como ya se ha señalado, desde el dramático aumento de la violencia registrado en Puerto Príncipe en el mes de julio, no ha sido posible reunirse con el Jefe de Policía del área metropolitana.

64. La Misión ha escrito periódicamente al Alto Mando y sus coordinadores regionales han escrito a los mandos regionales, para comunicarles la información recibida acerca de violaciones especialmente graves de los derechos humanos y para acelerar la investigación y la adopción de las medidas correspondientes. Las Fuerzas Armadas han respondido por escrito en un solo caso, suministrando la información que poseían respecto de una denuncia de torturas y tratos degradantes procedente del Departamento del Sudeste. En cuatro ocasiones, el Alto Mando se ha quejado por escrito a la Misión acerca de la presunta conducta de sus observadores; la Misión respondió manifestando su convicción de que los observadores no habían actuado de forma indebida. En algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas expusieron su versión de los hechos a la Misión de forma verbal o la difundieron por los medios de comunicación pero, de haberse llevado a cabo las investigaciones del caso, lo cierto es que no se ha comunicado a la Misión ni su evolución, ni sus resultados, ni medida alguna que se hubiera adoptado. Por ende, la Misión no ha podido cotejar los informes suministrados por víctimas y testigos con la información de que dispusieran las Fuerzas Armadas. En muy pocos casos se ha informado verbalmente a la Misión de que el presunto responsable de una violación de derechos humanos había sido arrestado. Nunca se le ha comunicado que se hayan adoptado medidas complementarias y desde luego no le consta que ningún miembro de las Fuerzas Armadas haya comparecido ante los tribunales civiles que entienden en estas cuestiones con arreglo a la Constitución. En poquísimos casos, al parecer, los presuntos implicados han sido trasladados a otros destinos. El Alto Mando ha asegurado a la Misión que ha adoptado medidas disciplinarias contra los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos, pero se ha negado categóricamente a darle información sobre el particular.

65. La Misión ha instado al Alto Mando a que declare públicamente la necesidad de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas respeten la integridad de las personas, y a que ofrezca garantías públicas de que los que permanecen ocultos

/...

en el país puedan regresar a sus hogares en condiciones seguras. No se ha hecho ninguna declaración pública en este sentido, pero en una reunión con el Alto Mando a comienzos de junio, la Misión se enteró de que a finales de mayo el Comandante en Jefe había indicado a los comandantes regionales la necesidad de evitar la "violencia gratuita".

66. La Misión ha tenido que comunicar reiteradamente a las Fuerzas Armadas su preocupación por la inobservancia por sus miembros y por quienes están vinculados a las Fuerzas Armadas del mandato de la Misión aceptado en febrero por las autoridades de facto. En el presente informe se han señalado frecuentes violaciones del inciso b) del párrafo 3 del mandato, que dispone el acceso inmediato de la Misión a todos los lugares, incluidos los lugares de detención, en relación con los cuales se hubieran denunciado violaciones de los derechos humanos. También se ha indicado que no se vela por la seguridad de las personas que se han puesto en contacto con la Misión según lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 4; por el contrario, se ha amenazado la seguridad individual de esas personas. En su informe provisional, la Misión denunciaba actos de intimidación dirigidos contra su personal así como contra las personas que se habían puesto en contacto con ella. Tales actos se han repetido con una gravedad cada vez mayor. En un caso reciente, en Puerto Príncipe, donde el grado de agresividad de los "adjuntos" y la policía ha sido especialmente alto, un "adjunto" apuntó con una pistola a algunos observadores que estaban visitando una comisaría. En otra ocasión, un Cap-Haïtien, un vehículo debidamente identificado de la Misión, que transportaba a un equipo de observadores, fue rodeado por hombres armados que llevaban uniforme militar, que lo golpearon con sus rifles y bastones delante de un oficial que no hizo nada por impedirlo. En Gonaïves, Hinche, Jacmel y Jérémie, algunos soldados intentaron intimidar a observadores insultándoles y blandiendo sus armas. Varios empleados locales de la Misión han sido objeto de graves amenazas tanto en sus hogares como en el desempeño de sus funciones. En virtud del inciso d) del párrafo 4 del mandato de la Misión, las autoridades se comprometen a abstenerse de entorpecer el cumplimiento de las funciones de la Misión, mientras que en el inciso f) de ese mismo párrafo se les pide que adopten las medidas necesarias para velar por la seguridad de los integrantes de la Misión; si se han dado órdenes para evitar las amenazas contra el personal de la Misión, esas órdenes no han surtido efecto.

## 2. Respuesta del sistema judicial

67. Ante las violaciones generalizadas de los derechos humanos, la Misión ha procurado activar el sistema judicial haitiano, alentándolo a ejercer la prerrogativa que le confieren la Constitución y la ley de mantener la legalidad e investigar las violaciones cometidas. No es motivo de sorpresa que la respuesta del sistema haya sido ambigua. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas y personas vinculadas a ellas siguen intimidando a jueces y fiscales, muchos de los cuales deben su puesto a influyentes oficiales del ejército. Por ejemplo, el 8 de julio, en el Vieux Bourg d'Aquin, Departamento del Sur, cuatro soldados armados, acompañados por el juez de instrucción local, declararon cesante al juez de paz de la zona y lo obligaron a abandonar su despacho. Más tarde, soldados y civiles armados fueron a buscarlo a su casa pero el juez ya había abandonado el país. También en julio, en Saint Louis du Sud, Departamento del Sur, el auxiliar de un juez de paz, simpatizante manifiesto del Presidente Aristide, fue atacado y golpeado por civiles armados que incendiaron una casa

/...

vecina. El 14 de julio, un soldado arrestó al juez de paz de Abricots, Departamento de la Grand'Anse, y lo golpeó con una pistola; más tarde se le acusó de tener retratos del Presidente Aristide. Varios jueces y fiscales nombrados por el Gobierno constitucional en 1991 fueron declarados cesantes en julio. El fiscal de Saint-Marc, Departamento de Artibonite, y los jueces de paz de Les Cayes, Maniche, Port-Salut y Saint Louis du Sud, Departamento del Sur, fueron declarados cesantes sin previo aviso, audiencia ni acusación.

68. A pesar de las intimidaciones, varios jueces y fiscales han demostrado gran valor e integridad frente a las amenazas y las posibles represalias. Algunos jueces han liberado a detenidos que habían sido arrestados por tener retratos del Presidente Aristide, alegando que eso no constituía un delito según el Código Penal de Haití. Otros han ordenado que se liberara a algunos detenidos cuyo arresto o detención habían sido ilegales. Muchas de estas órdenes de liberación se dictaron cuando había observadores de la Misión en la sala del tribunal. Al insistir constantemente en que se respeten las leyes de Haití, la Misión ha observado en los jueces una mejor disposición a aplicar las leyes relativas al arresto y a la detención, y un notable aumento en la concesión de la libertad provisional a los detenidos. El enjuiciamiento de los presos ha sido más rápido; para algunos incluso se ha celebrado la vista antes de que hubieran transcurrido 48 horas de su arresto - según exige la Constitución -, cosa que sucedía raramente antes de que llegara la Misión.

69. No obstante, en líneas generales los miembros del poder judicial son sumamente reacios a investigar casos que involucren a las Fuerzas Armadas. La Misión ha presenciado varios casos en que se dieron pruebas concluyentes de violación de los derechos humanos a un funcionario del poder judicial, sin que se adoptaran medidas al respecto. Estos funcionarios reconocen abiertamente que sería muy peligroso o inútil llevar a cabo una investigación. En el caso ya mencionado de Jude Monville y otras dos personas que fueron encontradas muertas cerca de Kyona Beach, Departamento del Oeste, el 10 de julio, la Misión presentó pruebas que relacionaban claramente a las víctimas con la prisión de Saint Marc; tanto el juez de paz como el commissaire du gouvernement se emocionaron visiblemente por las pruebas pero no iniciaron ninguna investigación ni se siguieron las pistas de que se disponía.

### 3. Relaciones con el público en general

70. La respuesta del público en general a la presencia y a la actuación de la Misión es difícil de evaluar. Gran parte de la población tenía grandes esperanzas, a veces quiméricas, respecto de la magnitud del cambio que la mera presencia de la Misión podría producir en la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, había una minoría hostil a la presencia de la Misión desde su llegada. Los que tenían fácil acceso a los medios de comunicación estatal y consideraban que la presencia de la Misión constituye una intervención extranjera que nadie deseaba han hecho objeto de durísimas críticas a la Misión, que incluyen la acusación de que la Misión no ha actuado con objetividad. La Misión también ha sido objeto de críticas por parte de quienes la consideran impotente o inadecuada para evitar las violaciones de los derechos humanos y la represión generalizada. En el período que se examina, no obstante, un número cada vez mayor de personas han acudido a las oficinas de la Misión en busca de asistencia, demostrando una comprensión cada vez mayor de su función. Un número

/...

creciente de ciudadanos haitianos han expresado su reconocimiento por la presencia de los observadores y su convicción de que si la Misión se retirara de Haití aumentaría su vulnerabilidad a las violaciones de los derechos humanos.

## VI. LA MISION Y LA TRANSICION

71. Desde el comienzo de la Misión se ha reconocido que su capacidad de mejorar sustancialmente la situación de los derechos humanos en Haití sería limitada mientras no se emprendiera una reforma sustancial de las instituciones indispensables para la protección de los derechos humanos. El acuerdo que define el mandato de la Misión también preveía que hubiera debates paralelos sobre un programa y un calendario para instaurar e iniciar una reforma institucional. El equipo de expertos en derechos humanos señalaba en su informe (A/47/908, anexo III, párr. 16):

"La credibilidad de la Misión dependerá en forma crucial de su capacidad no simplemente de informar sobre las violaciones de los derechos humanos, sino también de rectificarlos y de prevenir futuras violaciones. La debilidad institucional en Haití es tan grave, que su capacidad para hacer esto durante un período sustancial antes de que se emprenda una reforma institucional será inevitablemente limitada. Al mismo tiempo, es nuestra convicción que una reforma institucional importante no puede comenzar hasta que esté establecido un gobierno legítimo y existan otras condiciones previas de importancia crucial."

72. En el Acuerdo de la Isla Governors y en el Pacto de Nueva York se conviene en adoptar un programa de reforma institucional, que incluye el establecimiento de una nueva fuerza de policía civil independiente de las Fuerzas Armadas; la abolición de todas las fuerzas paramilitares; la creación de una Oficina de Protección de los Ciudadanos, y la creación de una administración penal. Se prevé la prestación de asistencia internacional para la reforma administrativa y judicial, para la modernización de las Fuerzas Armadas y para la creación de la nueva fuerza de policía. El Gobierno constitucional está comenzando a ocuparse de estas reformas y el Consejo de Seguridad ha aprobado el establecimiento y envío de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), que incluye supervisores de policía de las Naciones Unidas y un componente de asistencia militar encargado de impartir capacitación no bélica y de ejecutar proyectos de construcción. En el informe del Secretario General de 21 de septiembre de 1993 (S/26480) se prevé que, en lo posible, los supervisores de policía de las Naciones Unidas se desplieguen en los mismos lugares que los supervisores civiles de la Misión Civil Internacional de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Haití y que la UNMIH coordine estrechamente sus actividades con dicha Misión. La Misión Civil Internacional impartiría un curso de orientación para los supervisores de policía de las Naciones Unidas; de esta forma, la Misión podría estar en condiciones de aportar la experiencia de su labor en todo el país en las esferas de la reforma judicial, la reforma de la administración penal, y la selección y capacitación de los oficiales de la nueva policía en materia de derechos humanos.



## VII. CONCLUSION

73. Las divisiones y los antagonismos políticos y sociales en Haití son profundos; todavía hay poco control sobre los que tienen acceso a las armas y entre la población desarmada se ha propagado el temor de que haya una escalada de violencia con miras a evitar el regreso del Presidente Aristide. Durante el período decisivo anterior y posterior al regreso del Presidente, la experiencia adquirida y las relaciones establecidas por los observadores de la Misión a lo largo de seis meses de trabajo con la población local se aprovecharán para contribuir de la mejor forma posible a la transición pacífica hacia el orden democrático y constitucional en Haití.

-----